

7

CIUDADES Y REGIONES

“Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres.”

José A. Jiménez

Movimientos Sociales en México

Noviembre-Diciembre 2013



ÍNDICE

Editorial	3
El Estado y los movimientos sociales en México	
Modelos de desarrollo y desastres en México	4
Elizabeth Mancilla	
Dentro de algunos años	9
Jorge Isaac Egurrola Profesor Investigador FES Acatlán UNAM	
Movimientos sociales, regiones y represión	12
Luis Quintana Romero Profesor-Investigador FES Acatlán UNAM	
El surgimiento de autodefensas como una disputa al Estado	15
Carolina Hernández Calvario Maestrante en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos UNAM David Ulises Garibay Treviño Estudiante de la Facultad de Economía UNAM	
Alza tarifaria del transporte colectivo metro: otra estrategia gubernamental para expoliar a quienes menos tienen	18
Nataly Hernández Pérez Licenciada en Economía FES Acatlán	
Novedades editoriales	22
Comentarios al libro de Michael Storper: “Keys to the City. How economics institutions, social interactions, and politics shape development”	
Marcos Valdivia López Investigador CRIM- UNAM Luis Quintana Romero Profesor-Investigador FES Acatlán UNAM	

EDITORIAL

El Estado y los movimientos sociales en México

La situación socio-económica en el país es producto de fallas estructurales, las decisiones políticas del pasado reciente y la estrategia de seguridad comenzada en el sexenio pasado han generado la aparición de movimientos sociales, desde marchas y algunas otras expresiones, hasta la formación de grupos armados con el objetivo de exigir al Estado el cumplimiento de su papel en referencia a la conservación de la paz social y, en lo general, la mejora de las condiciones de vida de la población.

Los movimientos sociales surgen de una amplio número de inconformidades: el desempleo, el nivel salarial, la inseguridad, el alza de precios, contrarreformas a los logros de la clase trabajadora, la venta de empresas paraestatales, y en general como respuesta a la agudización de las políticas neoliberales pues en los últimos años se ha creado un proceso de degradación social en el país ¿Por qué habría que protestar en contra de un gobierno en donde la política económica y social tuviera un perfil humanista?

Uno de los debates teóricos y técnicos de los economistas consiste en cómo medir la participación del Estado y de qué magnitud debe ser esta, algunos defienden la idea clásica del *laissez-faire*, argumentando que es el mercado el único sistema capaz de asignar correctamente los recursos (v. gr., los economistas neoclásicos), otros asumen la idea de que es sólo en la medida en que el Estado tenga una participación más activa es posible sostener el crecimiento y el desarrollo (v. gr., los economistas keynesianos), en tanto que desde un punto de vista

crítico el rol del Estado debe ser el de mantener el orden y asegurar que el proceso general de producción capitalista discorra sin problemas, esto es, que cotidianamente la población acuda a sus centros de trabajo con el fin de producir bienes y servicios, pero sobre todo excedente apropiable (v. gr., los economistas marxistas).

Sin ánimo de parecer reduccionistas ya que estas tres nociones sobre el papel del Estado en la economía tienen distintas connotaciones. Sería materia de una amplia discusión explicar cuál es el papel que actualmente tiene este en el curso de la economía mexicana y sus regiones, pero es evidente que en México los intereses de la burocracia y algunos sectores reducidos se han privilegiado, no los de la sociedad.

La inconformidad de amplios segmentos de la población se explica por la falta de una visión histórica de la burguesía nacional; para que el capitalismo pueda reproducirse sin problemas es necesaria una estabilidad social y esta se asegura generando los puestos de trabajo suficientes, pagando mejores salarios e invirtiendo el excedente.

En México se tiene actualmente un Estado disfuncional con los objetivos históricos de la burguesía y aún más con los objetivos de la clase trabajadora. De continuar con la agudización de la política económica y social, en el futuro próximo no estaremos en el primer mundo sino abriendo las puertas del cuarto.

Modelos de desarrollo y desastres en México¹

Elizabeth Mancilla

En México, especialmente durante los últimos 15 años, los daños y pérdidas por desastres asociados a fenómenos de origen natural, se han disparado². Tan sólo entre 1999 y 2011 se registran más de 8 mil muertos y cerca de 4 mil personas desaparecidas, algo más de 2.5 millones de viviendas con daños parciales y 200 mil viviendas con pérdida total, y donde al menos 37 millones de personas han resultado directa o indirectamente afectadas³. A esto se suman las pérdidas no cuantificadas en infraestructura, principalmente carretera, o en sectores estratégicos como la agricultura, donde se estima que en promedio cada año se pierde alrededor del 12 por ciento de la superficie sembrada en el país⁴.

Más aún, al menos el 90 por ciento de este tipo de pérdidas se ha producido por eventos de origen hidrometeorológico, donde

las inundaciones y en general los efectos asociados a las lluvias se encuentran entre los de mayor recurrencia.

El tipo de eventos que ocurren y el volumen de daños que se registra cada año, muestran que el riesgo en México aumenta paralelo al incremento de los altos niveles de vulnerabilidad en todo el país. Desde hace décadas se encuentran en marcha procesos de construcción del riesgo que no solo han contribuido a incrementar la vulnerabilidad de las poblaciones susceptibles de ser afectadas por la presencia de fenómenos de origen natural, sino también a aumentar el número e intensidad de algunas amenazas socio-naturales como las inundaciones o los deslizamientos provocados por fenómenos de origen hidrometeorológico.

Es ya conocido y ampliamente aceptado a nivel internacional que los procesos de construcción del riesgo están estrechamente vinculados a los modelos de desarrollo implementados por los países, y México no es la excepción. La constante destrucción del medio ambiente, el deterioro de los niveles de vida de la población, la ocupación inadecuada del territorio y las condiciones generales de gobernabilidad que dificultan la gestión en sus diferentes ámbitos y en distintos momentos, han sido identificados como los principales impulsores del riesgo y, en nuestro país, son la clave que explican los niveles de riesgo existentes y su manifestación, cada vez más recurrente, en desastres de distinta magnitud e intensidad a lo largo y ancho del todo el territorio.

En efecto, la degradación ambiental en México se remonta a varias décadas de sobreexplotación y uso irracional de los recursos naturales, combinada con una reducida capacidad de gestión de las instancias federales, estatales y municipales para revertir o contener estos procesos. En los años recientes esto se

¹ Conferencia presentada en el IV Seminario sobre Desarrollo Regional: Conflictos y movimientos sociales, su dimensión regional: México 2013. FES-UNAM Acatlán, 14 de noviembre de 2013. Este documento es una versión ligeramente modificada del artículo “Ingrid y Manuel: nuevos desastres, viejas razones”, publicado en la revista *Nexos*. No. 431, noviembre de 2013. México.

² Incluye únicamente sismos, actividad volcánica, tsunamis, deslizamientos, lluvias, inundaciones, granizadas, heladas, nevadas, marejadas, sequías, ola de calor e incendios forestales. No se incluyen pérdidas o daños asociados con fenómenos de origen antrópico como explosiones o incendios.

³ Cifras obtenidas de “Desinventar 2013”. *Corporación OSSO-LA RED*.

⁴ Según cifras obtenidas a partir del “Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)”. *SAGARPA*.

ha traducido en un incremento sustancial de eventos tales como inundaciones, deslizamientos y grandes afectaciones por fenómenos climáticos como sequías y heladas, entre otros.

De los numerosos causantes de la degradación ambiental la deforestación es, sin duda, el factor que más relación estrecha guarda con la ocurrencia de desastres. Inestabilidad de laderas que producen deslizamientos, reducción de la capacidad de retención de lluvia en las partes altas de las cuencas que ocasionan avenidas torrenciales hacia las partes bajas y producen inundaciones, así como el arrastre de materiales que sedimentan ríos, lagunas y lechos de presas ocasionando una disminución en la capacidad de los ecosistemas de soportar cada vez menos volúmenes de agua de lluvia, son –y serán cada vez más- causa de severas inundaciones aún cuando la precipitación pluvial no sea intensa. En las zonas costeras el corte de manglares se traduce en inundaciones, erosión y en una intensificación de la amenaza al exponer los asentamientos humanos en forma directa frente al embate de los huracanes.

Desastres recientes en México que son evidencia contundente de estos procesos son los numerosos deslizamientos producidos por la tormenta tropical Manuel en Guerrero con consecuencias fatales como en el ocurrido en la comunidad de La Pintada o el mega deslizamiento que arrasó la comunidad de San Juan Grijalba en Chiapas en 2007, así como los efectos producidos por las avenidas torrenciales durante la tormenta tropical Stan en varias ciudades de Chiapas en 2005 o el fuerte impacto que tuvieron los huracanes Gilberto (1988) o Wilma (2005) sobre la zona turística de Cancún, por mencionar sólo algunos de ellos.

Por otra parte, el fracaso de la política social de -al menos- los últimos tres sexenios, ha contribuido a un incremento de la vulnerabilidad de millones de personas frente al impacto de

fenómenos tales como sismos, huracanes o simplemente lluvias. Por ello, no llama la atención que sean los sectores de más bajos recursos los que sistemáticamente son afectados por desastres, tanto en intensidad del impacto como por el volumen de personas.

Pero la pobreza no solo ha minado la capacidad de resistir los efectos de dichos fenómenos por la ocupación de viviendas inadecuadas, la falta de infraestructura, la ocupación de zonas de riesgo o la fragilidad de los medios de vida, sino también para recuperarse de ellos. Cada vez son más largos los tiempos para la recuperación de las poblaciones afectadas y en ocasiones aún no se ha logrado la recuperación completa cuando sobreviene un nuevo desastre, tal como ocurrió en el verano del 2010 en varios estados del sureste del país -principalmente Tabasco y Veracruz-; como sucedió con el desplazamiento de población de varias comunidades del noroeste de Chiapas por el desfogue de presas en el alto Grijalba, disfrazado de reubicación y que convirtió a miles de familias en damnificados permanentes.

En paralelo al deterioro de las condiciones de vida de la población, opera la completa ausencia de una política de ordenamiento del territorio por el abandono del Estado mexicano en las tareas de planeación. Funciones primordiales relacionadas con la planeación estratégica que tradicionalmente fueron funciones públicas, han sido trasladadas a organizaciones, corporaciones o empresas sociales y privadas. Las consecuencias inmediatas de esto han sido la sustitución de esquemas de decisión política basados en un proyecto de nación –integral e incluyente-, por formas “empresariales” o “gerenciales” que privilegian la privatización de los beneficios.

La ausencia de planeación en el crecimiento del número y extensión de las ciudades en México ha dado lugar a ciudades

caóticas y con grandes deficiencias de infraestructura para satisfacer las necesidades de una población creciente. En particular aquellas ciudades convertidas en ‘polos de desarrollo’ como las turísticas o las industriales, son las que más rápidamente han crecido sin condiciones adecuadas para albergar a la población recién llegada. Por ejemplo, la ciudad de Tijuana en la frontera norte o Cancún en el sureste, por mencionar sólo dos casos.

En consecuencia, hoy en día el crecimiento de la mancha urbana se da predominantemente por la vía de la irregularidad. Se estima que entre 5 y 6 de cada diez familias que se mudan a una ciudad o buscan asentarse en un lugar distinto al de residencia original, deben hacerlo ilegalmente porque no tienen acceso a una vivienda legal⁵. Esto da lugar a la proliferación de tugurios y al traslado de la pobreza hacia las zonas urbanas, pero también a la ocupación de suelo poco apto para habitación y en zonas inseguras.

Pero por el lado del mercado de suelo legal, la falta de planeación también resulta evidente. Se solapa la construcción de grandes conjuntos habitacionales para las clases trabajadoras desarticulados de la mancha urbana y que corren el riesgo de convertirse en los tugurios del futuro cercano, o la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios para habitación de los sectores de altos ingresos, plazas comerciales o conjuntos de oficinas en zonas ecológicamente frágiles que antes estaban destinadas a la conservación. Por ejemplo, los grandes hoteles construidos directamente sobre la franja costera en las zonas turísticas o los desarrollos inmobiliarios en la zona Diamante de

⁵ SEDESOL-El Colegio Mexiquense, A.C. “Requerimientos de suelo para la vivienda y el desarrollo urbano en el país, por zonas metropolitanas, aglomeraciones urbanas, ciudades y localidades urbanas y rur-urbanas, en el lapso 2004-2018”. Versión Final. México, 2004.

Acapulco, tanto para sectores de muy altos ingresos como para la clase trabajadora, y cuya construcción hoy se sabe que se dio por la vía de la corrupción al otorgar permisos de construcción que violan la normatividad vigente e incluso permitiendo a los desarrolladores inmobiliarios la modificación del cauce de ríos para la construcción de viviendas. En todo el país, sistemáticamente se violan las normas ambientales y del desarrollo urbano, ya sea para satisfacer las necesidades de la población pobre o del gran capital.

Ante esto, el riesgo de desastre en el país ha crecido al igual que su manifestación en cada vez más desastres y con impactos crecientes. La respuesta a este proceso no ha sido de Estado sino de Gobierno; es decir, más administrativa que estratégica y, por tanto, más reactiva que de prevención.

Con la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) a raíz de los terremotos de septiembre de 1985, instancia gubernamental -hoy representado en la Coordinación Nacional de Protección Civil- dependiente de la Secretaría de Gobernación y cuyo objetivo enunciativo es coordinar las acciones y las instituciones relacionadas con la prevención y atención de desastres, se consolida en el país una visión convenientemente conservadora sobre el riesgo y donde en vez de cuestionar y enfrentar las causas se opta por fortalecer las capacidades para una administración más o menos eficiente en situaciones de preparativos o atención de emergencias ante desastres.

En este terreno, a lo largo de casi tres décadas se ha avanzado en la descentralización del sistema (hoy existen sistemas estatales y unidades municipales de protección civil en todo el país), en la difusión de acciones de preparativos y durante las emergencias, en la organización de la respuesta y en la

realización de simulacros de evacuación, entre otros aspectos. Sin embargo, quizá el avance más significativo sea en el fortalecimiento de los sistemas de alerta que se refleja en una reducción significativa del número muertos por fenómenos de origen hidrometeorológico a partir del año 2000. Aún cuando estos sistemas todavía puedan reflejar fallas, como en el caso reciente de Guerrero, hay evidencias claras de casos exitosos por alertas efectivas. Por ejemplo, en 2005 a raíz de los desastres producidos por el huracán Wilma de categoría 5 en la escala de Saffir Simpson, donde únicamente cinco muertes en dos estados pudieron ser achacadas directamente al impacto del fenómeno sobre la población.

Al margen de los preparativos y respuesta, importantes avances existen en el terreno científico y tecnológico. Particularmente en el desarrollo de conocimiento e información sobre amenazas de origen natural como sismos, huracanes y erupciones volcánicas y en la modernización, desarrollo o integración de las redes monitoreo por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) –órgano científico-técnico del SINAPROC creado en 1988- y diversas universidades en todo el país. Destacan, en especial⁶

- La integración de la Red Sísmica Mexicana.
- La instrumentación de estructuras sujetas a movimientos sísmicos, así como la realización de investigaciones sobre sismo-

⁶ Mansilla, Elizabeth. “Marco general de riesgo en México”. Background paper Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2009. IPP LAC-ODMs y Pobreza – 06/2008, RBLAC-UNDP, New York. Publicado en <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/background-papers/?pid:34&pi:1>

resistencia, que contribuye al mejoramiento del diseño de edificaciones, aportando información para su reglamentación.

- La puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), especialmente para los 738 municipios más vulnerables a dichos fenómenos.
- El desarrollo del Sistema de Monitoreo de Volcanes Activos en México, dentro del cual destaca el monitoreo permanente del volcán Popocatepetl y la observación de los volcanes Citlaltépetl, De Fuego y Tacaná.
- La actualización o creación de los Reglamentos de Construcción y normas técnicas complementarias de entidades federativas que se encuentran en zonas sísmicas.
- El desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica del Distrito Federal, que permite alertar a la población 50 segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas desde el Pacífico.

Si bien estos avances son muy importantes y necesarios, stricto sensu no van a la raíz del problema, ni atacan de fondo los factores que impulsan los procesos de construcción del riesgo. La visión conservadora sobre el tema adoptada por el gobierno mexicano ha rechazado sistemáticamente la vasta evidencia sobre la causalidad del riesgo y el conocimiento generado por estudios sociales en México y en todo el mundo, tanto en el ámbito académico como en el de política internacional. Hoy, por ejemplo, informes de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el sistema de Naciones Unidas, a través de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, reconocen explícitamente que las causas raíz del riesgo se encuentran en los esquemas de desarrollo adoptados por los países y que es justo allí a donde deben dirigirse las

políticas públicas con el fin de reducir la recurrencia e impacto de los desastres. Sin embargo, pareciera que la respuesta en México ante cada desastre es explotar el lado más sensible de la ayuda humanitaria a través del manejo mediático de las emergencias y apostar al olvido. Apostar a un pronto retorno a la 'normalidad' para que no haya cuestionamientos sobre las verdaderas causas del desastre, para cubrir de nuevo el polvo con el tapete y seguir adelante.

Así, en México seguirán ocurriendo nuevos desastres por las mismas viejas razones.

Dentro de algunos años

Jorge Isaac Egurrola | Profesor-Investigador FES
Acatlán UNAM

Un día no lejano habremos de revisar los sucesos de este 2013. A la distancia, confirmaremos la trascendencia de sus secuelas y todo lo que estaba en juego tras esta maraña de noticias y opiniones enmarcadas por la tradición de nuestros políticos profesionales a pontificar más que a reflexionar e interpretar con rigor y sentido histórico. Cuando en América Latina, luego de vivir una larga etapa de depredación y estancamiento económico y social, la inmensa mayoría de los países transitan hacia formas de desarrollo post neoliberales, la determinación del nuevo gobierno priísta de mantener el credo neoliberal como toda respuesta ante la persistencia de la severa crisis del capitalismo contemporáneo y los enormes problemas que enfrenta México, resulta una amenaza para el futuro del país.

Al amparo de la dudosa legitimidad del llamado Pacto por México, acordado por el grupo gobernante y los políticos que le son afines en los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, se le da cause al paquete de “reformas estructurales” que abarca los ámbitos laboral, educativo y energético, como la salvación de la patria y producto de grandes acuerdos nacionales. Pero en realidad se trata de consumir el proyecto de país que, bajo los cánones del consenso de Washington, Carlos Salinas de Gortari delineó y acordó para México y que se ha convertido en precepto y guía para los distintos gobiernos y la transformación del estado.

Es evidente que en tres décadas de reinado, el modelo neoliberal ha propiciado el estancamiento y una mayor

dependencia económica de nuestro país; la degradación del mundo laboral e incrementos inusitados en el grado de explotación y generación de excedentes, que se corresponden con bajos niveles de inversión y crecientes transferencia de recursos al exterior. Nuestra economía se distingue por ser parasitaria y despilfarradora. La crisis actual muestra a un país vaciado de su densidad productiva, mermado de sus condiciones materiales de desarrollo, y hundido en una inadmisible pobreza e irracional violencia social.

Los remedios a la crisis que se nos imponen son los mismos que han generado la enfermedad; los mismos que dictan las grandes corporaciones y sus organismos supranacionales; los mismos que nuestros gobernantes, obsequiosos y obedientes, han aplicado durante tres décadas. La evidencia histórica señala que ninguna crisis estructural puede superarse aplicando la misma lógica que le dio lugar.

Sin embargo, a pesar del agotamiento e impertinencia de la lógica económica neoliberal, ella sobrevive gracias al poder del gran capital financiero y su expresión hegemónica en el terreno político e ideológico.

No debe sorprender que, en ese contexto, la resistencia y la protesta social se hayan reavivado. Desde diversas partes del país aparecen y resurgen movimientos y organizaciones sociales que bajo distintas condiciones de lucha se enfrentan al avance del proyecto neoliberal y pugnan a favor de los derechos laborales, el carácter público y democrático de la educación, la soberanía energética y alimentaria de México. Por su tradición combativa y la amplitud de su movimiento, sobresale la lucha magisterial de la CNTE, pero también en varios sectores sindicales, estudiantiles, campesinos y ciudadanos se pasa del descontento a la organización y la movilización. Son aún luchas

inconexas, pero prefiguran la posibilidad de una resistencia social amplia y articulada y, sobre todo, la necesidad de impulsar desde todos los frentes un nuevo modelo de desarrollo nacional.

Para dimensionar el alcance de todo lo que está en juego este aciago 2013, conviene revisar algunos aspectos centrales que subyacen en el conflicto educativo. Revisemos brevemente cinco de ellos.

1. Con su reconfiguración neoliberal, el estado mexicano ha desatendido cada vez más sus responsabilidades educativas; esto es, uno de sus más altos compromisos sociales. De la educación entendida como un valor social fundamental, que garantiza el pleno y armónico desarrollo del individuo y le da sustento a las normas democráticas de convivencia, se pasa a una visión economicista de costos y rendimientos. Se pretende llevar a la educación del ámbito público al mercantil, y desmantelar con ello el marco institucional del compromiso educativo del estado.

Por ello, culpar a los maestros de la situación que guarda la educación en los niveles obligatorios y traspasar parte de los costos operativos de las instalaciones escolares a los padres de familia, es una actitud tan cínica como ruin por parte del Estado mexicano.

2. Se pretende perpetuar la hegemonía neoliberal y reforzar su predominio ideológico a través de una concepción educativa maniquea que convalida la noción simplificadora de la realidad que la caracteriza. Su objetivo no es educar ciudadanos, propiciar el desarrollo pleno de sus capacidades individuales y asociativas, su integridad emocional e intelectual, arraigar en ellos el sentido de identidad nacional y pertenencia social para que sean individuos autónomos e íntegros capaces de trabajar y

desenvolverse libremente. Se trata, en cambio, de formar consumidores y empleados sumisos y obedientes, con una mentalidad individualista y una vocación de alta competencia que se identifiquen con la “misión de las empresas” y sus marcas comerciales. Para ello, nos se necesitan las ciencias de la educación y maestros, bastan la ingeniería económica y la mercadotecnia, los medios de comunicación y algunos instructores.

3. Desmantelar al magisterio como comunidad educativa representa el mayor despropósito de la contrarreforma. Socavar la integridad gremial de los profesores y el sentido de cuerpo docente forjado a lo largo del siglo XX, no es sólo ignorar la epopeya histórica que significó crear el componente subjetivo del patrimonio educativo y cultural de México, sino también tirarlo por la borda y condenar a las próximas generaciones a no contar con las condiciones indispensables para educarse. El magisterio mexicano no es la suma de profesores, es una fuerza creativa que ha sostenido el proceso educativo del país durante décadas. El propósito de atomizarlo para fines administrativos y laborales no atenta únicamente contra tal o cual profesor sino debilita y desnaturaliza al conjunto de esa fuerza creativa.

La educación es el resultado de la actividad creadora de una comunidad del saber, con valores asociativos y responsabilidades compartidas. Como suma de individuos, atomizados y divididos, esa comunidad no existe, y el proceso educativo tampoco. Lo mucho que debe mejorar la educación sólo puede alcanzarse fortaleciendo el magisterio como comunidad de educadores.

Con la satanización del sindicato -evidentemente indefendible y producto del sistema político mexicano- se pretende desacreditar todo tipo de organización de los trabajadores.

4. Se ha dicho, con razón, que la contrarreforma tiene un carácter administrativo y laboral, mas no educativo. Pretende, ante todo, establecer una nueva relación salarial entre el estado y los profesores, donde los derechos laborales sean restringidos o cancelados, con inestabilidad en el empleo y degradación y abaratamiento salarial. Donde opere la gestión gerencial de los programas escolares, y los profesores sean ajenos a su materia de trabajo.

5. Para enfrentar el proyecto educativo neoliberal y avanzar hacia una transformación educativa de gran calado a favor de su desarrollo integral, nuestro país tiene en la CNTE uno de sus principales baluartes. Su surgimiento, al despuntar los años ochenta, coincide con la crisis de la deuda y el inicio de la regulación monetarista. Es decir, la Coordinadora ha combatido desde sus orígenes al neoliberalismo y el proyecto educativo que enarbola. Con avances y retrocesos, es una organización curtida en una lucha que en diferentes etapas la ha llevado a enfrentar a seis administraciones federales y al SNTE con todo su corrosivo poder económico y político. Sobrevivir y mantenerse en pie de lucha es uno de sus grandes méritos, al que se le suma la creciente convocatoria gremial y la renovada capacidad organizativa mostradas en esta última etapa de su lucha. Además, producto de la reflexión y el análisis sistemático, cuenta con un proyecto alternativo que sus detractores y los medios de comunicación masiva han tratado de escamotear y desconocer.

Por eso, más allá de la necesidad de consolidar su posición negociadora e interlocución con los gobiernos federal y estatales para fortificar diques de contención suficientes para bloquear la implantación de la contrarreforma, la CNTE se prepara para una lucha de largo aliento a favor de la educación nacional. Es imprescindible que la sociedad mexicana entienda, a contrapelo

con la propaganda maniquea, que la CNTE es uno de sus principales activos.

Estos puntos permiten apreciar que, al igual que la energética y la laboral, la cuestión educativa que hoy se disputa en México involucra al conjunto de la sociedad. Independientemente de los sectores, organizaciones o personalidades que las encabecen, son luchas que nos convocan a todos y a las que nadie debe sustraerse. Así, dentro de algunos años, cuando revisemos los sucesos que ahora corren, nos podremos sentir orgullosos de haber sabido defender nuestro patrimonio y ganar nuestro futuro.

Movimientos sociales, regiones y represión

Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador FES
Acatlán UNAM

Los nuevos actores de los movimientos sociales en las regiones del país

La aprobación, prácticamente sin oposición alguna, de los recientes procesos de contra reforma económica impulsados por el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el aval de los partidos agrupados en el llamado Pacto por México, muestran un complejo proceso de debilitamiento de los movimientos sociales en el país. En ello se expresa la falta de organización de la sociedad, la derrota de sus movimientos y formas de expresión más importantes, la represión del Estado, la emergencia de la violencia y criminalidad proveniente del narco, la cooptación y derechización de la izquierda institucional encarnada en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en otras fuerzas políticas originadas en la izquierda, el regreso del PRI al poder, el creciente dominio del duopolio televisivo de la vida económica, política y social del país entre muchos otros factores .

La combinación de esos elementos ha dado lugar a un tipo de protesta nueva, que sigue un patrón similar en otros lugares del mundo y a la que Wallerstein destaca como una nueva geografía de la protesta:

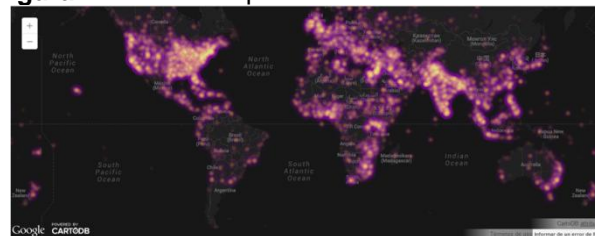
“Parece existir una geografía de la protesta que cambia rápida y constantemente. Salta aquí y luego es reprimida, cooptada o se agota. Y tan pronto como esto ocurre, salta en otra parte, donde

de nuevo se le reprime, se le coopta o se agota. Y luego salta en un tercer lugar, como si por todo el mundo fuera irreprimible” (Wallerstein, “La lucha mundial de clases: la geografía de la protesta”, <http://www.jornada.unam.mx/2012/06/03/mundo/026a1mun>).

Mientras que en los años ochenta los movimientos sociales se agrupaban en coordinadoras de masas (CNTE, CNPA, CONAMUP), organizaciones sindicales democráticas (FAT, STUNAM, SITUAM, etc.), organizaciones de izquierda (OIR-LM, MRP, ACNR, etc.), la expresión actual de la protesta es fundamentalmente desarticulada y en muchos casos, espontánea, lo cual ha impedido que se consolide y sostenga además de que se facilita su violenta represión.

El nuevo patrón de la protesta social se ha presentado en una gran cantidad de regiones del mundo, principalmente desde hace unos cinco años en coincidencia con el estallido de la crisis mundial. Un ejercicio interesante en el que se puede apreciar la difusión de la protesta social es el mapa animado que John Beielser ha construido con 250 millones de protestas a lo largo de 1979 a 2013. De acuerdo con los datos de Beielser, a partir del 2007 y coincidiendo con la crisis las protestas se han multiplicado exponencialmente por todo el mundo, en el mapa siguiente se muestran los datos del 2013.

Figura 1 Datos de la protesta social mundial en 2013



Fuente: John Beielser http://johnbeielser.org/protest_mapping/

Me gustan los estudiantes jardín de nuestra alegría

En ese contexto de desmovilización y fragmentación de la lucha social, la respuesta más articulada a los procesos de contra reforma han provenidos de los sectores de la cultura del país, principalmente por parte de los estudiantes universitarios y los docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Las posibilidades de respuesta desde otros sectores fueron acalladas previamente con la represión directa y el encarcelamiento de sus líderes más visibles, tal y como ocurrió con el asalto armado en el 2006 contra los pobladores de San Salvador Atenco en el Estado de México, que se oponían al despojo de sus tierras para construir un aeropuerto. También se buscó frenar cualquier tipo de protesta golpeando al sindicalismo democrático más combativo; la liquidación decretada por el gobierno panista de Felipe Calderón en 2009 de la empresa “Luz y Fuerza del Centro” tenía como objetivo principal dismantelar un sindicato que agrupaba a más de 40 mil trabajadores y se había caracterizado por su combatividad y compromiso con los movimientos sociales. O bien, mandando mensajes al sindicalismo oficial de que no habría tolerancia alguna; como prueba de ello en 2013 se encarceló a Elba Esther Gordillo, lideresa del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bajo acusaciones que no tienen que ver con los delitos más graves que había cometido y que han sido denunciados constantemente por la CNTE: malversación de cuotas sindicales, enriquecimiento ilícito y asesinato del líder sindical de la oposición Misael Nuñez Acosta el 30 de enero de 1981.

Un elemento más que debe ser considerado en los factores que han inhibido las luchas sociales a lo largo del país es la presencia del narco. Prácticamente no existe lugar en México que no haya sido tocado por la violencia de los delitos y

enfrentamientos emanados de las actividades del tráfico de drogas y personas, secuestros, robos y ejecuciones. La presencia de los cárteles del narco ha dado lugar a la aceptación social del crimen, tal y como lo menciona Juan Cajas en su texto “Violencia y narcotráfico, reflexiones desde la antropología” (<http://www.mxfractal.org/F38Cajas.htm>) “Los individuos sin arraigo social, encuentran en la urdimbre del crimen organizado un suelo protector, un espacio, una pedagogía de aprendizaje.”

Con ello la actividad criminal es vista como un oficio legal y rentable y, por ello, hoy en día es posible mirar en un video de Youtube a Servando González “La Tuta”, jefe del cártel de los “Caballeros Templarios” y uno de los narcos más buscados en el país, recorriendo tranquilamente un pueblo en Michoacán mientras la gente le besa la mano y le pide dinero (<http://www.proceso.com.mx/?p=363542>). La irrupción del narco en la vida cotidiana y la participación en sus actividades, sea por la fuerza o por consentimiento, ha provocado que la protesta en contra de las injusticias se subordine a la protección de la propia vida.

¿Y para dónde hacerse?

Es cierto que las nuevas formas de protesta han aportado novedosas formas de lucha a partir de la denuncia permanente en las redes sociales, la convocatoria a sus actividades vía internet y propuestas de resistencia pacífica no vistas antes. Sin embargo, siguen siendo movimientos intermitentes y que, como ha señalado Wallerstein, tienden a desaparecer rápidamente.

Por ello, resulta indispensable acompañar a estos movimientos y buscar darles permanencia y consolidación a través del impulso a la construcción de nuevas fuerzas de izquierda. Una nueva izquierda cuyo actuar principal sea la

organización y movilización popular, donde lo electoral se encuentre subordinado y acotado a una estrategia de combate al neoliberalismo y sus consecuencias. La izquierda debe recuperar su identidad y deslindarse tanto de esa “izquierda” oficial que está cada vez más cerca del PRI, como de su burocracia política que, bajo una bandera supuestamente progresista, administra los puestos públicos de diferentes gobiernos del país, pero que en realidad lo que hace es mantener los privilegios y el poder que les brinda el acceso al presupuesto público.

No es posible que un gobierno se siga considerando de izquierda cuando enfrenta violentamente a la protesta estudiantil y magisterial. No es posible que después de cada manifestación en las ciudades del país acaben presos decenas de jóvenes bajo acusaciones fabricadas y que después de semanas en la cárcel a pesar de no existir prueba alguna en su contra, sean en su mayoría liberados con las reservas de la ley para tenerlos presionados. No es posible que se imponga, como se pretende hacer en el Distrito Federal, una legislación que controla y criminaliza la protesta social al imponer horarios a las marchas y permitir que puedan ser disueltas por la autoridad local (<http://www.animalpolitico.com/2013/12/los-puntos-de-ley-de-manifestaciones-del-df-que-debes-conocer/#axzz2sMaWCGFf>).

En síntesis, la nueva protesta social debe converger con una nueva izquierda que, tal y como plantea el geógrafo David Harvey, logre reinventar las ciudades:

“...reivindicando abiertamente el derecho de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cambiar el mundo, a cambiar la vida y a reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos” (D. Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, p. 49, <http://192.185.116.146/~files321/pdf/CIUDADES%20REBELDES.pdf>).

El Surgimiento de autodefensas como una disputa al Estado

Carolina Hernández Calvario | Maestrante en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos UNAM

David Ulises Garibay Treviño | Estudiante de la Facultad de Economía UNAM

Los recientes acontecimientos protagonizados en Michoacán y Guerrero, y hoy extendidos Puebla y Tamaulipas, ponen en entredicho la concepción generalizada del Estado, entendido como la representación del interés colectivo, la representación del bien, el reino que nos saca de las pasiones de la vida civil regidas por el mercado (Plantón, Hegel). Comienza a circular en los medios de comunicación masiva la idea de que el Estado moderno es la relación social (y no sólo aparato o conjunto de instituciones) en la cual se expresa la dominación de una clase sobre otra. Se comienza a dar la razón a Maquiavelo, a Weber y a Lenin respecto a que “el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima (Weber, 2009). En este sentido, todas las asociaciones e individuos que no pertenecen a las fuerzas gubernamentales, sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. Ya que éste representa la fuerza coercitiva y punitiva de la reglamentación jurídica de un país, y los grupos sociales que no presten su consentimiento social a la política del Estado, están condenados a la disciplina que el aparato de coerción les imponga.

Esto se menciona por la respuesta que el Estado mexicano ha dado ante la reciente toma de municipios por medio de la fuerza armada de los habitantes del Estado de Michoacán. Acciones que intenta deslegitimar la violencia ajena a sí mismo, pero en ningún caso deja de hacer uso de la violencia para auto-sustentarse. Para muestra basta con ver los civiles muertos en manos del ejército mexicano el pasado 14 de enero en la localidad michoacana de Antúnez (Aristegui Noticias). Que deja de manifiesto que el Estado no es el reino del bien común, sino del interés parcial y que no tiene como objetivo el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder. Acontecimientos como el descrito no se entienden a cabalidad sin el conocimiento de que a lo largo de la historia de la humanidad se puede ver que el Estado tiene una naturaleza de clase: no se pueden entender de la misma manera el Estado en un modo de producción tributario, como el de los mexicas, con el Estado en el modo de producción feudal. Pero si se puede definir el poder político del Estado como la violencia organizada de una clase para la opresión de otra (Marx y Engels, 1969). En la carta a Kulemann del 12 de abril de 1871, Marx define al Estado burgués como “una máquina artificiosa y compleja, una máquina administrativa gubernamental, una máquina burocrática militar (Marx- Engels, 1969: 442-443) Máquina que resulta ser el instrumento de dominación de la clase encumbrada sobre la clase oprimida.

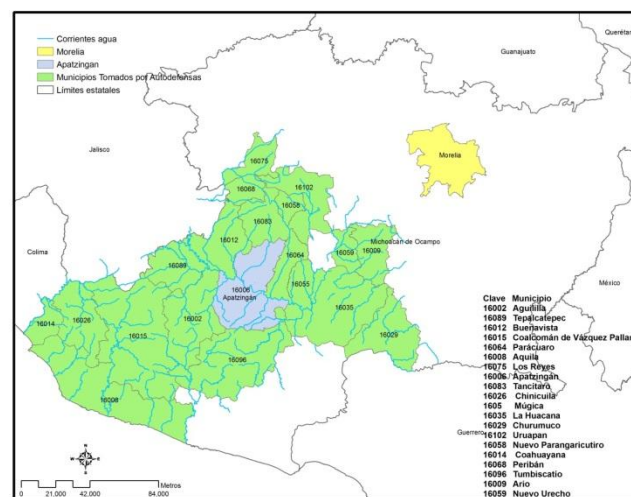
En este caso, el sector oprimido al que se refiere es el que integran los denominados grupos de autodefensa que surgieron como respuesta a los elevados niveles de violencia en el país, incrementados desde la declaratoria de guerra hecha por Felipe Calderón en 2007. Violencia que no brota de un solo afluente, sino que deriva de múltiples grupos organizados del narcotráfico, que ya han dado como resultado la muerte de cerca de cien mil personas en todo el país. Víctimas mortales superiores a las registradas en: la Guerra de Texas (1835-1836) con 2,200

muerdos; la Intervención Estadounidense (1846-1848) con 23,000 muertos; la Guerra de Reforma (1857-1861) con 8,000 muertos; a la Segunda Intervención Francesa en México (1862-1867) con 38,000 muertos (De re Militari: muertos en Guerras, Dictaduras y Genocidios. Capítulo VI).

Los grupos de autodefensa se dan a conocer en 2011 en la región conocida como Tierra Caliente en Michoacán, cuyos reclamos estaban enfocados acabar con los secuestros, asesinatos y extorsiones que se registraban en la región por la organización Caballeros Templarios, que dominaban en la zona. A lo largo de los últimos años la organización conformada principalmente por campesinos y ganaderos michoacanos, lograron “recuperar” más de 32 municipios del Estado y motivar a habitantes de otras localidades, incluso Estados, a organizarse. Sin embargo, en días recientes representantes de las autodefensas de Tepalcatepec y el gobierno firmaron un convenio de 8 puntos ante la Segob en el que se comprometen a: 1) institucionalizar las autodefensas al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales; 2) obligar a las autodefensas a registrar ante la Sedena las armas que poseen o portan; 3) auditar los recursos públicos de los municipios en conflicto, conforme a las disposiciones legales aplicables; 4) la opción para las autodefensas de formar parte de la Policía Municipal, siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del cabildo del ayuntamiento en el que operan; 5) la rotación de los agentes del Ministerio Público local y federal, así como la instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público; 6) el compromiso de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán de mantener comunicación permanente con los municipios afectados para ofrecerles el apoyo conforme a las facultades que tiene dicha comisión; 7) facilidades en la reglamentación de las personas que tengan libertad condicional por portación de armas; 8) aplicación de todo el peso de la ley a

los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa en los acontecimientos en Michoacán (Proceso, No 1944:11).

Con este pacto se podría prever que el Estado mexicano retomó el poder en Michoacán, sin embargo, en el siguiente mapa se observa que el movimiento armado encabezado por las autodefensas se ha expandido, y que el acuerdo de Tepalcatepec resulta limitado para tales propósitos. Ejemplo de ello es la reciente aparición en Yurécuaro, Michoacán, de un grupo que se dice desvinculado de las autodefensas encabezados por los dirigentes de Tepalcatepec, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito: Acahuzotla, Palo Blanco y Mazatlán. Quienes han tenido que actuar por cuenta propia, al margen de lo que se pregona como estado de derecho, buscando por sus propios medios hacer frente a la violencia que desde años atrás padecen, siendo la violencia el recurso más utilizado y apropiado cuando se les niega toda posibilidad de justicia.



Bibliografía:

Aristegui Noticias

La jornada domingo 26 de enero de 2014

La Crónica, 31 de enero de 2014

Marx, Carlos y Federico Engels. 1969. Manifiesto del Partido Comunista. En Obras Escogidas. Progreso, URSS.

Proceso, No 1944, 2 de febrero de 2014.

Weber, Max. 2009. La política como vocación. Alianza Editorial, Madrid.

Alza tarifaria del transporte colectivo metro: otra estrategia gubernamental para expoliar a quienes menos tienen

Nataly Hernández Pérez | Licenciada en Economía
FES Acatlán

Desde el pasado viernes 13 de diciembre, cuando entró en vigor la disposición del Gobierno del Distrito Federal de elevar la tarifa del transporte colectivo metro de 3 a 5 pesos, se han suscitado claras manifestaciones de rechazo ante tal medida por parte de ciudadanos y usuarios pertenecientes a diferentes sectores sociales –entre los que se encuentran estudiantes universitarios, intelectuales, académicos, investigadores, periodistas, y hasta diputados-.

Al parecer, la razón que llevó al Jefe de Gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera, a implementar tal aumento tarifario fue el resultado del levantamiento de tres encuestas de consulta ciudadana que ordenó realizar a las empresas Parametría, Mitofsky y Covarrubias. Según afirmaron las encuestadoras, en todas ellas se obtuvo un porcentaje a favor de incrementar las tarifas superior al 50% de los pasajeros consultados -habiéndose encuestado una muestra de 7,200 usuarios-, siempre que esto se tradujera en mejoras en la calidad del servicio público, encontrándose que la gran afluencia de pasajeros, los vendedores ambulantes y el retraso en el servicio son los aspectos que más disgustan a los usuarios. De modo que, en aras de la “defensa de los intereses de la mayoría ciudadana”, Mancera decretó el ajuste en la tarifa argumentando que con el

incremento se garantiza un Metro más accesible, seguro y cómodo, pues ha afirmado que los recursos generados - estimados en 3 millones de pesos anuales, por la Comisión de Hacienda del Distrito Federal- serán administrados por un fideicomiso que se encargará de su inversión en accesibilidad, seguridad y comodidad para todos los usuarios (Cruz, 2013).

El plan para el mejoramiento de este sistema de transporte contempla 11 rubros, a saber: mejoramiento del servicio que, tras 44 años de funcionamiento, aseguran que está por concluir su vida útil; la compra de 45 trenes con aire acondicionado para Línea 1 y 12 más para Línea 2; la renovación integral de la Línea 1 y remodelaciones de estaciones con apoyo del Metro de París; el “mantenimiento mayor” a los 45 estaciones de la Línea 2; la reparación de 105 trenes fuera de servicio; el mejoramiento de los tiempos de recorrido de trenes en las líneas 4, 5, 6, y B, de afluencia media; la renivelación de las vías en la Línea A; la sustitución de 50 escaleras eléctricas en las Líneas 1,2 y 3; la compra de 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores; la compra de un nuevo sistema de radiocomunicación; y la modernización del sistema de torniquetes (Villanueva, 2013, en línea).

A primera vista pareciera tratarse de una medida gubernamental pertinente y necesaria ante las malas condiciones de funcionamiento de tan importante sistema de transporte. Pero, ¿por qué es que hay tantas voces inconformes con dicha estrategia?, ¿qué ha llevado a los grupos de jóvenes y activistas a protestar contra el alza tarifaria e invitar a los usuarios del Metro a brincarse los torniquetes con tal de evitar el pago del boleto en numerosas estaciones? (Romero, Quintero y Suárez, 2013). Ante la negativa de estos grupos, el gobierno capitalino afirma haber mantenido hasta ahora una postura “prudente”, evitando reprimir a los manifestantes aun cuando advirtieron desde un principio que tomarían las medidas necesarias para evitar que los usuarios

no paguen su boleto. Sin embargo, han dejado claro que no revocarán la medida implementada, pues “fueron los propios capitalinos quienes decidieron el incremento en el sistema de transporte colectivo”.

El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, señaló que incluso se han instalado mesas de trabajo con grupos que en los días recientes se han manifestado, a fin de informar a los inconformes de los subsidios que otorga el gobierno y entrar en una ruta de conciliación que permita la inclusión de los distintos sectores. Pero dice saber bien que “hay quienes sólo buscan la confrontación y su objetivo es vandalizar”, razón por la cual están dispuestos a “tomar las medidas necesarias para evitar la alteración del orden público”. ¿Será entonces que lo que mueve a los inconformes no es más que mera rebeldía sin sentido?, ¿se trata por tanto de un acto de desobediencia civil sin algún fundamento lógico basado en la defensa de intereses de los ciudadanos?

Lejos de lo que el discurso político pretende hacernos creer respecto a las causas del descontento social referentes a este tema –así como a muchos otros- existen varias razones de peso por las cuales los ciudadanos en general, no solo podemos, sino debemos alzar la voz contra el atropello de nuestros derechos e intereses ante casos de abuso descarado de poder, aparentemente justificado por la necesidad de implementar estrategias económicas para el “bienestar común”. En lo referente al caso que aquí nos ocupa, me parece que es claro que el gobierno capitalino no ha hecho más que “oir” la protesta ciudadana, sin tener el más mínimo interés en “escuchar” las razones por las que la población rechaza su estrategia como medida funcional para la solución de las problemáticas del sistema de transporte, ni de “actuar” al respecto. Se pretende hacer ver al movimiento reaccionario como una “inconformidad natural” ante el cambio, un acto de rebeldía sin sentido que se

callará con el paso del tiempo al irse aceptando las nuevas condiciones, evitando así que las demandas de los manifestantes sean tomadas en cuenta por los demás ciudadanos y logren trascender en acciones concretas.

Pero lo cierto es que los inconformes tienen importantes razones para estarlo. En primera instancia, han hecho saber que no defienden intereses de ningún partido político, sino que se consideran activistas pacíficos a los que siempre han querido tachar de violentos y sólo por protestar ante los abusos de autoridad. En el tema del alza al Metro, se muestran inconformes con la manera en que se realizaron las mentadas encuestas con las que el gobierno dice haber consultado la opinión ciudadana, pues consideran que dichas encuestas no fueron realmente representativas. Y si llegáramos a pensar que se equivocan, resulta que hay opiniones afines en diferentes diarios del país por parte de analistas interesados en el caso; Ernesto Villanueva – investigador y columnista de la revista Proceso, entre otras cosas- por ejemplo, afirma que la consulta sobre el precio del Metro tuvo al menos tres problemas: a) parte de las encuestas fueron llenadas por los propios encuestadores, como lo demuestran varias fotos están en su poder y que circulan en redes sociales para dar cuenta de ello; b) ninguna institución independiente verificó la metodología de las encuestas.; y c) se mintió a los encuestados al no preguntarles si estaban de acuerdo en privilegiar a algunos segmentos poblacionales en perjuicio de otros. En este sentido, concluye que lo cerrado de los resultados fue más bien para darle cierta verosimilitud a una cuestión de por sí absurda: “el ciudadano diciendo que está de acuerdo en ir contra su propio interés” (2013, en línea).

Si consideráramos incluso certeros los resultados de las encuestas, nos dice el investigador, la promesa de que, con el incremento tarifario, el país verá convertirse al sistema de transporte colectivo en uno del primer mundo no es más que una

“tomadura de pelo”. Argumenta que la propuesta de actuación sobre los 11 rubros que ha señalado el gobierno capitalino no constituye un plan formulado a conciencia, ni con pleno conocimiento de los problemas por enfrentar por las siguientes razones:

1) se habla de que el equipo de operación está por concluir su vida útil, lo cual considera falso, puesto que en estos 44 años - primero el DDF y ahora el Gobierno del Distrito Federal- han sido los responsables de que todo funciona bien.

2) se dice que con los 2 pesos se comprarán 45 trenes con aire acondicionado para Línea 1 y 12 más para Línea 2, a lo que se pregunta ¿y los que han comprado en las dos recientes administraciones por qué han desaparecido?;

3) se propone la renovación integral de la Línea 1 y remodelaciones de estaciones con apoyo del Metro de París, pero critica que se debe invertir en lo que se requiere: eficacia y seguridad, no figuras de ornato.

4) se propone “mantenimiento mayor” a los 45 estaciones de la Línea 2, pero él se pregunta ¿a dónde se fueron los 1, 200 millones de pesos aprobados por la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) destinados precisamente al mismo propósito?

5) se pretende reparar 105 trenes fuera de servicio, lo cual considera mentira dado que esos 105 trenes son esqueletos que no pueden bajo ningún concepto ser reparados, y de hecho sería más barato comprarlos nuevos.

6) se plantea mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las líneas 4, 5, 6, y B, de afluencia media, pero señala que no se dice nada por lo que hace a los trenes de las líneas 1, 2 y 3 que tienen la más alta afluencia de pasajeros

7) se sugiere renivelar vías en la Línea A, pero indica que no se ha dicho, en cambio, que jamás debieron haber construido nada ahí por las fallas sísmicas, que se hace lo que se puede año con año, en una zona donde no hay solución sólo paliativos

8) se propone sustituir 50 escaleras eléctricas en las Líneas 1,2 y 3, y hace notar que callan el asunto de las 34 escaleras que desaparecieron de la Línea 12 y que seguramente van a “reaparecer” como parte de las nuevas propuesta

9) se propone comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores, sin embargo, afirma que este gasto estaba incluido ya en los 1, 200 millones de pesos autorizados por la ALDF

10) se quiere comprar un nuevo sistema de radiocomunicación, cuando se ha pagado varias veces por el mismo sistema que asegura no funciona; y

11) se busca modernizar el sistema de torniquetes, cuando tienen más de tres años haciendo cambios para que los torniquetes puedan contar los pasajeros que pasan, de modo que arguye que hoy en día los ingresos son “al tanteo” (Villanueva, 2013, en línea).

Tan solo con esos puntos en contra, considero que ya es posible notar la simulación y el cinismo de los dirigentes políticos para abusar del poder y saquear recursos, que intentan disfrazar de conciencia ciudadana y compromiso social.

Si se analiza la situación con mayor detenimiento, sin quedarse sólo con la información contenida en el discurso político, es sencillo comprender las razones detrás del descontento social. No se trata sólo de un aumento de 2 pesos en la tarifa de este sistema de transporte, sino de un golpe más a la economía de las familias de la localidad. El grueso de la clase trabajadora mexicana no ha percibido, en las últimas tres décadas, más que

agudas reducciones en su poder adquisitivo, relacionadas con la caída histórica del salario real y la constante precarización del trabajo. Entre 1980 y 2011 los salarios mínimos reales en México han perdido más del 69% de su poder adquisitivo; de hecho, el salario mínimo se ha convertido prácticamente en un “mini salario” y es el más bajo en Latinoamérica (Quintana, 2012, en línea).

Y todavía el jefe de Gobierno capitalino, al referirse al incremento a la tarifa del sistema de transporte colectivo, se atreve a “presumir” que aun así el Metro de la ciudad de México es el segundo más barato del mundo, tan sólo por debajo del de Beijing, China. A mi parecer, bajo el contexto económico y político en que vivimos los mexicanos, de crisis y corrupción al por mayor, este tipo de comparativos son absurdos y se utilizan con el afán de engañar y desviar la atención de la ciudadanía de los verdaderos problemas por resolver. Soy afín a la opinión de que el gran problema del sistema de transporte colectivo (Metro) no radica solamente en la falta de recursos económicos para mejorar su funcionamiento, sino esencialmente en la ausencia de los factores que hacen a un servicio público. Como señalara Villanueva, la corrupción, la impunidad y la opacidad que ahí perviven es la cuestión que debe atacarse a fondo (2014, en línea).

Referencias:

Cruz, A. (2013) Con el incremento se garantiza un Metro más accesible, seguro y cómodo: Mancera. Proceso. Recuperado desde: <http://www.jornada.unam.mx/2013/12/17/capital/036n1cap>

Quintana, L. (2012) El salario mínimo del miedo: México y la región Latinoamericana en el contexto de la reforma laboral. Boletín Ciudades y Regiones #1. México. Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales.

Romero, G., Quintero, J. y Suárez, M. (2013, 14 de diciembre) Protestas sin violencia en 14 estaciones del Metro contra alza en tarifa. La Jornada, p.31

Villanueva, E. (2013) STC Metro: Un aumento tapizado de mentiras. Proceso. Recuperado desde: <http://www.proceso.com.mx/?p=359660>

Villanueva, E. (2014) STC-Metro: de mal en peor. Proceso. Recuperado desde: <http://www.proceso.com.mx/?p=361719>

(2013) Mancera prepara el terreno para aumentar la tarifa del Metro de tres a cinco pesos. Proceso. Recuperado desde: <http://www.proceso.com.mx/?p=357921>

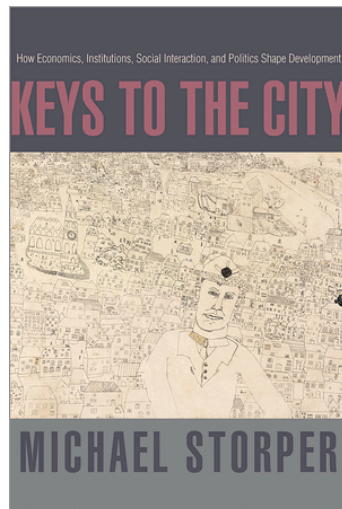
(2013) Cede Mancera y ‘negocia’, ahora sí, con opositores al aumento del Metro. Proceso. Recuperado desde: <http://www.proceso.com.mx/?p=360608>

Novedad Editorial

Comentarios al libro de Michael Storper: “Keys to the City. How economics institutions, social interactions, and politics shape development”

Marcos Valdivia López | Investigador CRIM- UNAM

Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador FES
Acatlán UNAM



En su nuevo libro *Keys to the City* (<http://press.princeton.edu/titles/10022.html>), Michael Storper ofrece un gran resumen de su actual

entendimiento y reflexión teórica acerca del funcionamiento y operación de las ciudades y de por qué éstas son relevantes para entender la economía local, regional y global de nuestros días; pero además el libro tiene la particularidad de que representa una excelente oportunidad para todo aquel que ha sido escéptico, o en el mejor de los casos temeroso, de cómo dialogar críticamente con la Geografía Económica y la Economía Urbana del mainstream, ello con la finalidad de entender los procesos económicos urbanos y regionales actuales.

El libro se divide en cuatro partes, en las cuales se organizan los elementos económicos, institucionales, sociales y de política que conforman la “caja de herramientas” con la que Storper busca explicar el crecimiento y desarrollo de las ciudades modernas. Desde la misma introducción del texto se advierte que, para realizar esta labor, es necesario recurrir a la economía, la geografía económica y la sociología económica.

El libro tiene un eje fundacional que descansa en muchos de los posicionamientos teóricos que ha desarrollado Storper (junto con otros colegas) en los últimos años y que han aparecido en diversos artículos en los principales journals del área. Pero este eje de discusión es, a lo largo de los capítulos, un intenso detour con los principales posicionamientos teóricos relevantes; en especial, con la Nueva Economía Geográfica (NGE) à la Krugman y con la Nueva Economía Urbana Neoclásica, en particular, con la Teoría del Equilibrio Espacial à la Glaeser, así como con la Economía Política y la Economía Sociológica para discutir los factores institucionales y de interacción social. Un detour que esta cobijado y ejemplificado con una multiplicidad de casos empíricos fundados (e incluso anécdotas) que dan intuición al lector sobre los argumentos teóricos que se discuten y que son en sí mismos complejos.

En el libro los diferentes puntos abordados se pueden discutir en cuatro aspectos centrales: 1) la crítica a la Nueva Economía Urbana Neoclásica (NEUN); 2) el origen de las economías de aglomeración; 3) la discusión moderna de las economías externas; y 4) las tensiones metodológicas a las que conduce la lectura del texto.

Crítica a la Nueva Economía Urbana Neoclásica

El capítulo 2 del libro “Workshops of the World economy. People, Jobs, and Places” es, sin duda, la parte central del texto y la que mayores bases económicas tiene. En ese capítulo Storper retoma el viejo cuestionamiento popular de “qué fue primero el huevo o la gallina” y lo utiliza coloquialmente para discutir con el marco teórico dominante de la economía neoclásica, formalizado en el Modelo de Equilibrio Espacial General (MEEG) de Edward Glaeser. El MEEG postula que las elecciones individuales, racionales y maximizadoras de los consumidores y las empresas provocan que los precios de la vivienda, los salarios y los tamaños de ciudades se determinen simultáneamente. En ese modelo, el equilibrio general se alcanza debido a que, en algunas ciudades, la existencia de salarios nominales elevados se compensa a la baja, en términos reales, por la combinación de precios elevados de la vivienda y algún tipo de ausencia de amenidades; mientras que en ciudades con salarios nominales bajos, los precios más baratos de la vivienda y un paquete de amenidades sin costo (principalmente en términos de un clima placentero) les ofrece a estos trabajadores algún tipo de compensación. En consecuencia, los trabajadores se mueven de una ciudad a otra buscando mejores amenidades y aceptando salarios nominales bajos y las empresas por su parte los siguen; la migración conducida por preferencias personales se convierte en la gallina que da lugar al desarrollo regional y urbano, en tanto las empresas que siguen esos flujos migratorios son el huevo.

Storper cuestiona el MEEG sin recurrir a técnicas sofisticadas de modelación, le bastan unas simples correlaciones entre amenidades (clima, salud, transporte, educación, artes, etc.), la población y el ingreso para concluir que las ciudades con mayor crecimiento pertenecen a un grupo con altas amenidades y altos salarios, lo cual echa por tierra la predicción principal de igualación de utilidades del MEEG.

Para Storper el dilema del huevo y la gallina se esclarece si se considera que es la producción la fuente del desarrollo urbano y, en consecuencia, hay ciudades en las que se localiza cierto tipo de empresas (la gallina) que son seguidas por la gente, amenidades y mercados de consumidores locales (el huevo).

El párrafo final, con la conclusión del capítulo, es particularmente demoledor para el marco de la teoría neoclásica del equilibrio y vale la pena citarlo textualmente:

“El sistema urbano mundial -desde sus ciudades más ricas a las más pobres- no es un conjunto de patios de juegos o parques de amenidades, sino un vasto sistema de talleres interrelacionados.”

El origen de las economías de aglomeración

Una de las grandes provocaciones del libro gira en torno a la metáfora ya referida del huevo y la gallina para discutir uno de los grandes temas de la teoría de localización: los trabajadores siguen a las firmas o las firmas siguen a los trabajadores (JEG, 2009, Storper & Scott, Rethinking Human Capital, Creativity and Urban growth). Esta metáfora finalmente sirve para establecer un posicionamiento crítico en el libro que versa sobre las inconveniencias y limitaciones de la teoría de las amenidades – es decir, de una aproximación que privilegie la oferta de la mano de obra y por lo tanto de los mecanismos para atraer gente calificada-, así como de los desarrollos recientes sobre la clase creativa (à la Florida) que han generado demasiadas expectativas

entre los policy makers. Storper es enfático al señalar que este argumento tiene sus limitaciones cuando se discute seriamente sobre la causalidad y los mecanismos causales que finalmente hacen detonar el crecimiento urbano y regional; al respecto, el argumento de Storper es claro al señalar que es la base económica la que debe verse como el origen de los procesos de causación acumulativa que caracterizan a los procesos virtuosos de crecimiento regional. En este sentido, Storper es claramente simpatizante –si bien no adherente- con la Nueva Geografía Económica para entender –al menos formalmente- los mecanismos con los cuales se generan economías de aglomeración y de sus impactos para entender la dinámica de movilidad de firmas y trabajadores en la creación de regiones y ciudades. Al respecto, quizá uno de los ejemplos más ilustrativos en el libro lo otorga cuando crítica la hipótesis del clima como factor explicativo del surgimiento del sun belt en los EU y ,en contraste, nos otorga un racional claramente fundamentado en el traslado de manufactura hacia el sur del país (40s) basado en salarios más bajos e innovación tecnológica.

Economías Externas

Una de las partes más sugerentes del libro es el tratamiento moderno (y complejo desde una perspectiva de ciencia social) sobre, en general, cómo funcionan y operan histórica e institucionalmente las economías externas (Marshallianas) y del porqué estas nos conducen a ver a la ciudad –en palabras de Storper- como un gran taller (workshop). Es aquí donde se observan las mejores conexiones con la economía política y la economía sociológica, con las cuales un argumento contemporáneo de geografía económica basado en un abstracto modelo centro-periferia sería francamente limitado. El resultado es poner al lector atento a una renovada lista de categorías analíticas, que Storper propone y que deben ser consideradas en el análisis de la economías externas y de su diferenciación entre

pecuniarias y no pecuniarias: matching, sorting and learning (à la Marshall-Arrow-Romer), Bonding & Bridging (group effects), buzz-buzz (face to face interactions), spatial habits (habitus à la Bordieu), etc.

Tensiones metodológicas

El libro también deja al lector algunas tensiones metodológicas deliberadamente abiertas por el autor. La discusión de la trayectorias de dependencia (y de los accidentes históricos) –por ejemplo, el de que uno de los fundadores de Silicon Valley quería estar cerca de su mamá- quedan abiertas a discusión. Otro es el aspecto de interacción entre lo global y lo local, si bien hay una crítica contundente de que el mundo no es plano (criticando con esto el posicionamiento periodístico de gente como Friedman del New York Times) y que las interacciones locales son muy importantes, también Storper deja abierta una ventana de que existe una interacción compleja entre lo global y lo local (discusión de telepresence ver la Tabla 11.3 del libro). Otro aspecto es el referente a la discusión de desigualdad e inequidad que generan las economías de aglomeración y que no pueden ser reducidas a un planteamiento neoclásico basado en supuestos de una función de bienestar social. Finalmente, otro aspecto que no es plenamente discutido en el texto pero que es indirectamente señalado, son las limitaciones (e incluso problemas metodológicos) de los supuestos de racionalidad completa y habilidades computacionales que imponen a los agentes los modelos neoclásicos (entre ellos el de la NGE) y de cómo generan problemas al vincularse con un marco teórico más complejo (como el adelantado por Stoper) donde muchos de estos supuestos entran en conflicto. La implicación más fuerte de este punto radica en la dificultad para formalizar e instrumentar una teoría con las características y atributos expuestos en el libro de Storper.

No se puede concluir sin realizar un comentario sobre la relevancia del libro de Storper para el caso mexicano y en especial para las zonas metropolitanas de México. En este sentido, la principal enseñanza del texto es no dejarse llevar a la ligera con las tentaciones de dinamizar un centro urbano a partir únicamente de amenidades, esto puede ser muy importante para el caso de los procesos de gentrificación que ciudades como la de México están viviendo en muchos de sus distritos y vecindarios urbanos. Tal y como se menciona en el capítulo de conclusiones –las cuales por cierto están escritas provocativamente como una carta a los hacedores de política (Dear Policymaker some keys for you)- el elemento clave de cualquier proceso de desarrollo para una ciudad-región depende de especializarse tan favorablemente como le sea posible.

En síntesis, el libro de Storper debe erigirse como un libro obligado para nuestros estudiantes del área de economía urbana y regional y para cualquier otro estudioso interesado en los procesos urbanos de nuestro país.

Coordinación General

Dr. Luis Quintana Romero

Coordinación Editorial

Mtro. José Antonio Huitrón Mendoza

Coordinación Técnica

Mtro. Jaime Alberto Prudencio Vázquez

Lic. Ángel Rodolfo Reynoso Cruz

Boletín Ciudades y Regiones aparece de manera bimensual y es publicado por el *Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales* (SAREE). Oficina: Miguel Velázquez # 91-B, Colonia 10 de abril, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53320. México. Teléfono: 5623-1775. La distribución del boletín es gratuita por medio de la página de internet del seminario: www.saree.com.mx/unam y se autoriza su reproducción parcial o total siempre que se cite la fuente.

Cita recomendada:

Seminario de Análisis Regional y Estudios espaciales (2013) "Ciudades y Regiones", Boletín # 7 Noviembre-Diciembre, México.